COLECCIÓN **GENERAL**

¿DIFERENTES RECURSOS, CONFLICTOS DISTINTOS?

La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia

Angelika Rettberg,
Ralf J. Leiteritz,
Carlo Nasi,
Juan Diego Prieto
(edición académica)

¿Diferentes recursos, conflictos distintos?

Para citar este libro: http://dx.doi.org/10.7440/2018.05

¿Diferentes recursos, conflictos distintos?

La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia

Angelika Rettberg
Ralf J. Leiteritz
Carlo Nasi
Juan Diego Prieto
(edición académica)

Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política

¿Diferentes recursos, conflictos distintos?: la economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia / Angelika Rettberg, Carlo Nasi, Ralf J. Leiteritz, Juan Diego Prieto (editores) -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2018.
414 páginas: ilustraciones; 17 x 24 cm.

Otros autores: María del Pilar Lozano, Daniel Quiroga Ángel, Alexandra Milena Bernal Pardo, Manuel Eduardo Riaño, Juan Felipe Ortiz-Riomalo, Juan Camilo Cárdenas.

ISBN 978-958-774-679-2

1. Conflicto armado – Investigaciones – Colombia 2. Economía política – Investigaciones – Colombia I. Rettberg Beil, Beatriz Angelika II. Nasi Lignarolo, Carlo III. Leiteritz, Ralf J. IV. Prieto, Juan Diego V. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia Política

CDD 338.9861 SBUA

Primera edición: abril de 2018

© Angelika Rettberg, Carlo Nasi, Ralf J. Leiteritz, Juan Diego Prieto
© María del Pilar Lozano, Daniel Quiroga Ángel, Alexandra Milena Bernal Pardo, Manuel Eduardo Riaño, Juan Felipe Ortiz-Riomalo, Juan Camilo Cárdenas
© Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política

ISBN: 978-958-774-679-2
ISBN *e-book*: 978-958-774-680-8
http://dx.doi.org/10.30778 /2018.05

Corrección de estilo: Tatiana Grosch
Diagramación interior: Nidian Andrea Rincón
Diseño de cubierta: Magda Lorena Morales

Impresión:
DGP editores S.A.S.
Calle 63 Bis n.° 70-49
Teléfono: 430 7050
Bogotá, D. C., Colombia

Ediciones Uniandes
Calle 19 n.° 3-10, oficina 1401
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 3394949, ext. 2133
http://ediciones.uniandes.edu.co
infeduni@uniandes.edu.co

Publicaciones Facultad de Ciencias Sociales
Carrera 1.ª n.° 18A-12, Bloque G-GB, piso 6
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 339 49 49, ext. 4819
http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co
publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

¿Diferentes recursos, conflictos distintos?: la economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia contó con el apoyo y financiación de International Development Research Centre (IDRC).
Las interpretaciones, opiniones, conclusiones y los hallazgos expresados en este libro son propias de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de International Development Research Centre (IDRC).

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia.
Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.

Contenido

AGRADECIMIENTOS · 1

1 ¿RECURSOS DIFERENTES, CONFLICTOS DISTINTOS? UN MARCO PARA COMPRENDER LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO Y LA CRIMINALIDAD EN LAS REGIONES COLOMBIANAS · 3
Angelika Rettberg, Ralf J. Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto

2 "TOMÉMONOS UN TINTO": CAFÉ, CONFLICTO ARMADO Y CRIMINALIDAD EN COLOMBIA · 47
Angelika Rettberg

3 LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE EL CONTRASTE ENTRE LOS SECTORES BANANERO Y FLORICULTOR · 83
Carlo Nasi, con la colaboración de María del Pilar Lozano

4 CONFLICTO CRUDO: PETRÓLEO, CONFLICTO ARMADO Y CRIMINALIDAD EN COLOMBIA · 135
Angelika Rettberg y Juan Diego Prieto

5 MINERÍA DE CARBÓN Y GUERRA: UNA MIRADA A LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL CESAR Y LA GUAJIRA · 193
Daniel Quiroga Ángel

6 "NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA": FERRONÍQUEL, ÉLITES LOCALES Y GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA · 255
Alexandra Milena Bernal Pardo

7 TRAS EL CORAZÓN VERDE: LOS VAIVENES DEL CONFLICTO EN LA REGIÓN ESMERALDERA DE COLOMBIA · 293
Ralf J. Leiteritz y Manuel Eduardo Riaño

8 MISMO RECURSO, DIFERENTES CONFLICTOS: UN ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE ORO, CONFLICTO Y CRIMINALIDAD EN SEIS DEPARTAMENTOS COLOMBIANOS · 341
Angelika Rettberg, Juan Camilo Cárdenas y Juan Felipe Ortiz-Riomalo

AUTORES · 401

Agradecimientos

Este libro ha contado con el apoyo de muchas personas e instituciones.

Los mayores agradecimientos son para el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá, el cual financió el grueso de la investigación que hizo posible el trabajo de campo realizado por los diferentes autores. Gracias a esa financiación, el libro se encuentra también traducido al inglés. En IDRC contamos con el respaldo irrestricto y paciente de Markus Gottsbacher, a quien expresamos un especial agradecimiento.

Gracias, además, a las decenas de expertos, académicos, productores, empresarios y funcionarios estatales tanto a nivel central como en las regiones que aceptaron entrevistas y nos permitieron conocer la manera en que funcionan las economías de los recursos estudiados y cuáles son las realidades regionales en las cuales se enmarcan.

También van nuestros agradecimientos a las múltiples instituciones que nos facilitaron datos, contactos en las regiones estudiadas y acceso a expertos y académicos. Estas instituciones fueron la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Tunja (Javier Guerrero), la Universidad EAFIT en Medellín (María Alejandra González) y el Observatorio del Delito de la DIJIN en la Policía Nacional, en Bogotá.

En la Universidad de los Andes recibimos apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía, la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. El Laboratorio de Cartografía de la Universidad de los Andes desarrolló los mapas regionales que acompañan cada capítulo. Gracias también al Departamento de Política de la Universidad de California, Santa Cruz.

Se han presentado versiones preliminares de los capítulos incluidos aquí en diversos foros y conferencias académicas, como el congreso del International Studies Association (ISA) en Estados Unidos, el congreso del European Consortium on Political Research (ECPR) en Alemania, el congreso del Latin American Studies Association (LASA) en Brasil, el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) de Alemania, Brown University de Estados Unidos, la Red de Economía Política para América Latina (REPAL), el Stockholm International

Peace Research Institute (SIPRI), la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil y la Universidad de los Andes. Agradecemos especialmente los comentarios de Matthias Basedau (German Institute for Global and Area Studies [GIGA]), Philippe Le Billon (University of British Columbia) y Richard Snyder (Brown University) por sus comentarios a la investigación en su fase preliminar.

Contamos con un grupo talentoso de asistentes de investigación que facilitó enormemente nuestra tarea. Gracias a Brenda Ardila, Horacio Coral, Mauricio García, Juanita Goebertus, Sergio Guillermo, Laura Hamón, Pedro Hernández, Mariana Maldonado, Yaddi Miranda, Sebastián Pantoja, Catalina Rodríguez, Federico Segura y Camilo Vargas.

Gracias también a los evaluadores anónimos de este libro, quienes nos permitieron afinar ideas y extraer más claramente los aportes del texto.

Finalmente, agradecimientos muy especiales a nuestras familias y amigos, sin cuyo apoyo todo sería mucho más difícil.

1
¿Recursos diferentes, conflictos distintos? Un marco para comprender la economía política del conflicto armado y la criminalidad en las regiones colombianas*

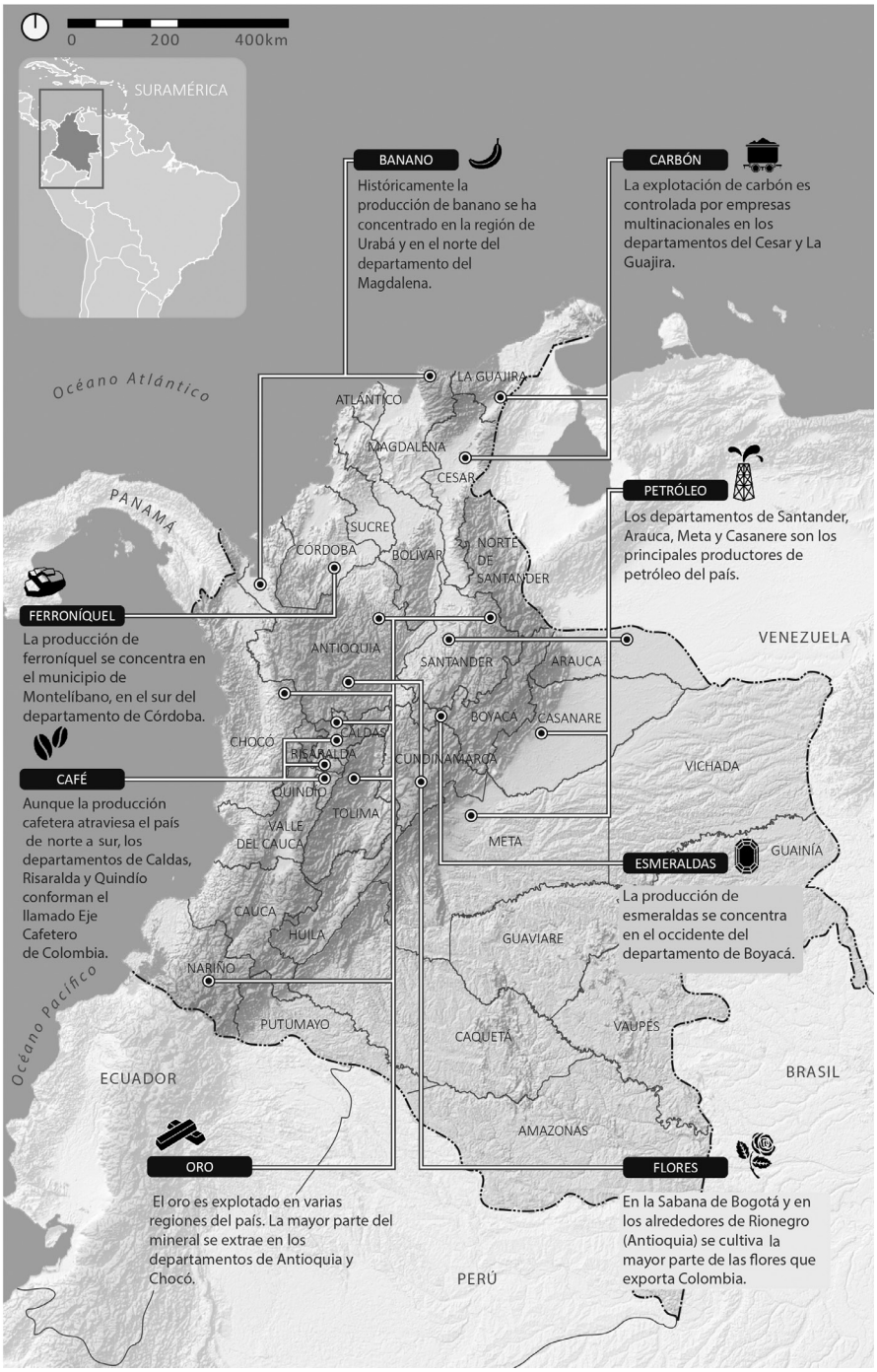
Angelika Rettberg, Ralf J. Leiteritz,
Carlo Nasi y Juan Diego Prieto

Introducción

Una de las preocupaciones en los recientes diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido la sostenibilidad de un acuerdo de deposición de armas y una desmovilización masiva de combatientes en un contexto social y económico marcado por la presencia de mercados ilícitos y de múltiples incentivos para la criminalidad. La amplia circulación de armas, la existencia de diversas organizaciones criminales distintas a las guerrillas, el narcotráfico y, en especial, la disponibilidad de recursos naturales y actividades económicas integradas hace décadas en las dinámicas de extorsión de las organizaciones armadas conforman un conjunto de oportunidades para que la criminalidad continúe, se regenere y se transforme incluso después de que se silencien los fusiles de las organizaciones guerrilleras. Juntos, estos factores plantean un enorme reto en términos de encarrilar al país en la dirección de una paz sostenible que complemente y apalanque los progresos que Colombia ha venido haciendo en otros terrenos.

Este libro indaga sobre las fuentes de riesgo del posconflicto colombiano. Lo hace desde la perspectiva de los vínculos generados hace décadas entre los

* Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.7440/2018.06



Mapa 1. Regiones y recursos estudiados

Fuente: Elaborado por Paola Luna, Laboratorio de Cartografía, Universidad de los Andes, con base en información suministrada por los autores.

recursos legales y las dinámicas del conflicto armado y la criminalidad en diversas regiones colombianas[1]. Intencionalmente se aparta del énfasis que habitualmente se hace del narcotráfico —un recurso *ilícito*— como combustible de la guerra colombiana (Angrist y Kugler 2008; Arias *et al.* 2014; y Holmes, Gutiérrez de Piñeres y Curtin 2006) para explorar los vasos comunicantes entre la guerra y las actividades económicas *lícitas* que han constituido y se sostienen como la columna vertebral de la economía colombiana. El libro postula que Colombia es un país de regiones, no solo, como ha sido propuesto, desde el punto de vista cultural y económico (Gutiérrez de Pineda 1968; Zambrano 1998; Banco de la República 1952; Arango Cano 1956; Meyer y Villar Borda 2005), sino también desde el punto de vista de la intensidad y la forma que han adoptado el conflicto armado y la criminalidad. Desglosados, los indicadores de violencia nacional arrojan grandes diferencias entre regiones y a través del tiempo, sugiriendo que, en cincuenta años de actividad, la guerra colombiana ha sido dinámica, revigorizándose en algunas partes, debilitándose en otras y transformando continuamente sus maneras de operar. Este libro argumenta que una mirada al nivel subnacional, que describa y analice la relación entre recursos legales y guerra en diferentes regiones, y que identifique algunos de los factores que han configurado esta relación a través del tiempo, permitirá identificar los puntos álgidos hacia los cuales estudiosos y diseñadores de política pública deberán orientar su atención. Así, podrán prevenir que la superación del conflicto armado desate o agudice nuevas formas de criminalidad. En breve, se trata de extraer las lecciones para prevenir que un eventual acuerdo de paz se torne irrelevante a la luz de la continuación de prácticas criminales más allá del enfrentamiento armado. Si los recursos naturales han jugado un papel en el inicio o la continuación del conflicto, la construcción de paz deberá necesariamente abordar sus impactos y legados.

Los capítulos que conforman este libro se guían por las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido las realidades regionales de la relación entre recursos legales y guerra en Colombia? ¿Cuáles son algunas de las fuentes de variación entre regiones en la relación entre recursos legales y guerra que se puedan asociar

1 Entendemos el *conflicto armado* como el enfrentamiento violento que hace décadas protagonizan varias organizaciones armadas ilegales con el Estado colombiano en torno a temas como la distribución de la tierra y el manejo y propiedad de los recursos naturales, y la *criminalidad* como el fenómeno por medio del cual individuos y organizaciones se apropian de bienes y dinero para fines de lucro personal, sin promover una agenda de tipo político. Para la caracterización del colombiano como un conflicto armado acogemos la definición del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), de acuerdo con la cual el enfrentamiento debe ser violento, debe incluir al Estado, tiene un objetivo político y produce al menos 1000 muertes anuales atribuibles al conflicto (SIPRI 2012). En la experiencia de los países sumidos en conflicto, la línea divisoria entre el conflicto armado y la criminalidad es borrosa, a medida que los actores armados requieren de financiación e incurren en actividades delictivas y los actores criminales han desarrollado agendas políticas con las que buscan incidir en la organización social.

con distintas dinámicas de guerra? Además de las aspiraciones estratégicas nacionales de los actores armados, ¿de qué forma las propiedades y procesos de producción de diferentes recursos inciden en sus acciones? Por otro lado, ¿en qué medida las condiciones del contexto de conflicto armado afectan las estructuras del proceso de producción, así como las estrategias de los actores frente al entorno? ¿Qué mecanismos median la relación entre los recursos elegidos y las dinámicas que adopta el conflicto armado colombiano en sus manifestaciones regionales? ¿Por qué algunas regiones —y algunos recursos— parecen haber desarrollado capacidades para "blindarse" frente a las dinámicas de la guerra? ¿Existen —y cuáles son— factores protectores en la extracción y producción de algunos recursos que mitiguen la vinculación de los recursos a la guerra?

Para responder estas preguntas, el libro contiene estudios de caso detallados del banano (en Urabá), el café (en Caldas, Risaralda y Quindío), el carbón (en La Guajira y Cesar), las esmeraldas (en Boyacá), el ferroníquel (en el municipio de Montelíbano, Córdoba), las flores (en la Sabana de Bogotá), el oro (en Antioquia, Caldas, Chocó, Santander, Tolima y Nariño) y el petróleo (en Arauca, Casanare, Meta y el municipio de Barrancabermeja, Santander). Ninguno de estos recursos es un bien manufacturado y todos forman parte del repertorio de los bienes primarios. Difieren entre ellos en su contribución al PIB y a las exportaciones colombianas (véase tabla 1). Son producidos o extraídos en diferentes regiones del país (véase mapa 1) y el alcance geográfico de su producción varía. A pesar de sus múltiples diferencias, los recursos comparten una característica fundamental: contribuyen de manera sustancial a la configuración de las economías regionales. Por consiguiente, son casos útiles para abordar las preguntas planteadas[2].

En cada caso se examinó la (inter)relación entre las dinámicas del conflicto armado colombiano (nuestra variable dependiente) en términos del tipo y presencia de actores, de las formas de victimización (homicidios, desplazamiento forzado, secuestros, ataques y extorsión) y de la intensidad del enfrentamiento, por un lado, y las características del proceso de extracción o producción de los recursos en cuestión (nuestra variable independiente), por el otro. En las características del proceso se consideraron aspectos como el sector de la economía al que pertenece el recurso, la estructura internacional de los precios, la composición, la estructura de propiedad y organizacional, la fuente del capital (doméstico o

2 Esta lista de casos no agota el panorama de recursos legales que han sido permeados por las dinámicas de la guerra en Colombia. Podrían agregarse estudios sobre la madera en el Chocó, el coltan en el suroriente del país, la caña de azúcar en el Valle del Cauca y la palma de aceite o la ganadería en múltiples regiones del país. Futuros estudios podrán completar el mapa con esos casos. Sin embargo, consideramos que la variedad de los incluidos aquí ofrece una mirada suficiente para captar tanto la diversidad de los vínculos entre recursos legales, conflicto y guerra, como aquello que tienen en común.

extranjero) y la intensidad y organización de los factores de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología). También se consideró el nivel en el que está regulada la producción (ya sea por leyes estatales o por estándares de buen comportamiento autoimpuestos) y se incluyeron factores históricos y contextuales, como el nivel en el cual la extracción ocurre en un contexto de enclave (Di John 2006) o de colonización. Se consideraron también los vínculos con otras actividades agrícolas o extractivas, así como su inserción en las prácticas tradicionales de las comunidades residentes en las zonas. Finalmente, se tomaron en cuenta factores geográficos como, por ejemplo, si la producción ocurre de forma dispersa o concentrada y si tiene lugar de forma lejana o distante a los centros urbanos (Le Billon 2001). Como variables intermedias o moderadoras incluimos información sobre la presencia y el rol de instituciones estatales, así como sobre las estrategias de los grupos armados ilegales. En todos los casos buscamos aportar información tanto acerca de la organización y las reglas internas del proceso de producción o extracción como también acerca del contexto dinámico (social, institucional, político y económico) en el cual tiene lugar la interacción entre recursos y conflicto. Se partió de que dicho contexto configura las preferencias y la elección de estrategias de los actores relacionados, lo que permite entender mejor cómo los actores armados ilegales y aquellos asociados a la extracción del recurso se adaptan y responden a los incentivos institucionales que les propone el contexto.

Dependiendo del recurso estudiado y la correspondiente configuración de la economía política del conflicto en las distintas regiones observamos que primaban unos factores explicativos más que (o en vez de) otros. De ahí que en los distintos capítulos no se examinaran de manera uniforme las variables independientes e intermedias reseñadas en el párrafo anterior. La imagen que queda al examinar los distintos recursos es de heterogeneidad. En cada caso no basta con mirar la simple adición de variables explicativas, sino su combinación particular en una coyuntura determinada.

De ahí que este trabajo refleje una complejidad mayor que el de otras aproximaciones a la relación entre recursos y conflicto, especialmente trabajos a nivel nacional, que quizás dan a entender erróneamente que la principal causa de la presencia y/o reproducción de un conflicto armado se debe a la producción de un recurso específico (como el petróleo o el narcotráfico), o a las características intrínsecas de un recurso dado. Nuestro estudio revela que a nivel subnacional existen muchas economías políticas del conflicto, muy distintas entre sí, y en las que interactúan múltiples factores.

Con el rastreo de procesos (*process tracing*) que realizamos se obtuvieron retratos detallados de la relación entre los recursos y la guerra en las regiones estudiadas (Bennett y Checkel 2014; George y Bennett 2005). A su vez, estos análisis de cada caso (*within-case analysis*) sirvieron como insumo para un análisis

histórico-comparativo (Mahoney y Rueschemeyer 2003; Mahoney y Thelen 2015) que nos permitió ir más allá de las particularidades de cada caso y elaborar un marco analítico más amplio. En este marco proponemos que la relación entre los recursos estudiados y las dinámicas del conflicto armado puede ser *motivante* (cuando el control de las rentas generadas por el recurso constituye un motivo principal para explicar la presencia de actores armados en la región), de *complementariedad* (cuando el control del recurso estudiado o de sus rentas no es un motivo principal de la presencia de tales actores, pero la oportunidad de obtener rentas de los recursos los involucra en las dinámicas de la guerra) y de *aislamiento* (cuando los recursos se mantienen aislados o "blindados" de las dinámicas de guerra).

En las siguientes secciones se discutirá la literatura académica relevante a las preguntas de investigación que orientan este libro. Acto seguido se resumirán los casos estudiados y se presentará el marco analítico construido para categorizarlos bajo alguno de los vínculos señalados. El capítulo concluye con la descripción de la estrategia metodológica adoptada, así como con varias aclaraciones acerca de los datos consultados.

La literatura académica

Que las organizaciones armadas y criminales requieren financiación y que esta muchas veces se deriva del saqueo y control de los recursos naturales de las sociedades en guerra, forma ya parte del consenso aceptado en torno a la incidencia, la continuación y la transformación de los conflictos armados internos (Ross 2003; Bannon y Collier 2003; Berdal y Malone 2000; Collier y Hoeffler 2004; Elbadawi y Sambanis 2002; Fearon 2005; Keen 1998).

A partir del trabajo seminal de Keen (1998) y su llamado a la necesidad de considerar las funciones económicas de la violencia en contextos de conflicto armado —es decir, la utilización de la violencia como instrumento para alcanzar metas económicas— se ha desarrollado una vasta literatura en las últimas décadas, que ha contribuido a examinar la relación entre recursos, conflictos armados, criminalidad y desarrollo. Complementando los trabajos que enfatizan las motivaciones políticas y culturales de las rebeliones (desde clásicos como Galeano 1971 o Gurr 1970, hasta obras más recientes como Boix 2008, Kalyvas 2007 y Gutiérrez Sanín 2008), esta corriente se centra en la viabilidad pragmática de crear y mantener un grupo armado irregular. Collier (2000) resumió sucintamente las principales condiciones que facilitan la irrupción de conflictos basados en recursos en determinados países: alta dependencia de la exportación de bienes primarios, abundancia de hombres jóvenes desempleados y con poca educación, y estar experimentando un período de declive económico.

En breve, esta literatura ha sugerido que la guerra trata de muchas más cosas que de ganar; "no es sólo la ruptura de un sistema particular, sino una manera para crear un sistema alternativo de ganancias, poder y protección" (Keen 1998, 11). En contraste con otras aproximaciones, esta literatura postuló que la riqueza, y no la pobreza, es condición esencial para que ocurran las rebeliones.

De ahí que haya hecho carrera el término "maldición de los recursos" (De Soysa 2000), o la noción según la cual la riqueza natural se convierte en un lastre más que en una bendición para los países pobres, pues los aboca a la inestabilidad política, el saqueo y la corrupción, en vez de encaminarlos hacia la ruta segura hacia el desarrollo. Como resultado, hoy sabemos más acerca del impacto de los recursos disponibles en las dinámicas de conflicto. Existe dificultad para romper o transformar la relación entre recursos y guerra, de tal suerte que aún después del cese de los conflictos, los países tienen reducidas perspectivas de constituir Estados de Derecho operantes y eficaces (Haggard y Tiede 2014).

Los mecanismos

Más allá de constatar el vínculo entre recursos y conflicto, varios estudiosos han intentado dilucidar los mecanismos que vinculan los recursos a los conflictos. Se ha formulado la pregunta de cómo los recursos generan impactos en la estabilidad política de los países y en el surgimiento o mantenimiento de organizaciones armadas. Un tema explorado se relaciona con el tipo de recursos involucrados en los conflictos. Le Billon (2001) y Ross (2004) acuñaron el término "saqueabilidad" de los recursos. Recursos saqueables son aquellos que se pueden transportar y distribuir fácilmente, como los diamantes, que combinan alto valor y poco volumen. En contraste, recursos como la madera, el carbón y el petróleo enfrentan elevadas barreras a la entrada a los mercados, bien sea porque su producción involucra capital y tecnología, o porque su rentabilidad depende de un alto volumen de ventas.

A la saqueabilidad se suman conceptos como la viabilidad (*feasibility*: Collier, Hoeffler y Rohner 2009) financiera y militar de los grupos armados ilegales, la "bloqueabilidad" de los recursos —que llama la atención sobre la capacidad de los grupos armados ilegales de afectar los canales (y/o infraestructura necesaria) de distribución del recurso— y la legalidad de los recursos —lo que se refiere a la existencia de mercados y precios internacionales institucionalizados y legales (Ross 2003; Le Billon 2009).

Otros elementos de contraste entre recursos se refieren a si son intensivos en mano de obra o en capital (Dube y Vargas 2013; Di John 2006) y a factores espaciales. El geógrafo Philippe Le Billon (2001), por ejemplo, propuso que la proximidad a centros urbanos (que ofrecen mayor seguridad y acceso a servicios

institucionales), así como si la producción es dispersa o concentrada, urbana o rural, permiten predecir la vulnerabilidad de los recursos para terminar involucrados en dinámicas de guerra. Di John (2006) agregó que elevadas barreras a la entrada —y si los recursos se producen en entornos de enclave— pueden también explicar diferencias entre recursos a la hora de vincularse a los conflictos, pues los enclaves de producción más comúnmente producen o profundizan conflictos sociales que son permeados por actores ilegales. Ross (2004, 35) sugirió que "el petróleo, los minerales no combustibles y las drogas están causalmente vinculados a los conflictos, pero los *commodities* agrícolas legales no". Humphreys (2005), en contraste, sugirió que países que dependen de bienes agrícolas deben considerarse en mayor riesgo de conflicto y deberían, por tanto, buscar diversificar sus economías.

Las instituciones

El contexto institucional se ha convertido en un factor explicativo fundamental de las guerras por recursos. La debilidad o incapacidad estatal —o la falta de instituciones operantes— se ha convertido en tema recurrente en las explicaciones acerca de por qué los recursos terminan vinculados a la inestabilidad política y a la corrupción (Collier y Hoeffler 2005; Karl 1997). La ausencia de instituciones estatales funcionales —o su debilitamiento en el transcurso de un conflicto armado— facilita el saqueo de recursos y permite la evasión del castigo por parte de grupos armados ilegales, a la vez que impide la integración de los recursos en una planeación económica de largo plazo. La centralidad de las instituciones no implica necesariamente que todos los recursos altamente institucionalizados estén siempre mejor protegidos frente a la guerra: algunos, como el petróleo, gozan de sofisticadas infraestructuras legales y comerciales internacionales y nacionales y, sin embargo, recurrentemente se convierten en fuente de rentas para combatientes y corruptos (Dunning 2005; Karl 1997; Ross 2013, 2012, 2008, 2001; Bridge y Le Billon 2012).

Por consiguiente, los investigadores han volcado su atención a los atributos que deberían tener las instituciones extractivas estatales y privadas para aumentar su eficacia en la prevención de los vínculos entre recursos y conflictos (Buhaug y Lujala 2005; Mähler, Shabafrouz y Strüver 2011; Lujala y Rustad 2011; Nichols, Lujala y Bruch 2011). Snyder (2006) sugiere que la relación entre recursos saqueables e instituciones políticas no tiene que llevar al desorden, siempre y cuando las instituciones estatales (y no solamente los actores privados) se beneficien de la explotación de recursos (por ejemplo, a través de impuestos), y usen las rentas obtenidas para fortalecerse. De manera similar, la estructura de propiedad de los recursos —es decir, si la extracción o producción es manejada por

actores públicos o privados, y en qué medida los excedentes entran a las arcas de unos y otros— juega un papel determinante (Jones Luong y Weinthal 2010; Wegenast 2016). Nichols, Lujala y Bruch (2011) y Clement (2010) proponen la adopción de esquemas de gobernanza multinivel para abordar los impactos de la disparidad de poder, la interdependencia entre los actores y las disímiles percepciones de riesgo. Un tema central de esta literatura es que si los recursos naturales están vinculados al estallido o a la continuación de las guerras, su gestión y control deberá formar parte ineludible de las medidas para prevenirlas o terminarlas.

Las limitaciones

Al cabo de más de dos décadas de existencia, la literatura sobre recursos y guerra ha experimentado importantes cambios y revisiones. Así, por ejemplo, Keen (2012) ha cuestionado varias propuestas centrales de la literatura como atractivas sobre-simplificaciones de realidades mucho más complejas. En efecto, argumenta Keen, al centrar la atención en combatientes codiciosos, la literatura ha descuidado aspectos como la responsabilidad de la comunidad internacional o de los gobiernos evasivos del escrutinio en el surgimiento y continuación de los conflictos armados internos. En otro sentido, Berdal (2005) postuló que la distinción nítida entre codicia y agravio, acuñada por Collier y colegas, resultaba llamativa desde el punto de vista de la formulación de políticas públicas —por su simplicidad y aparentemente sencilla traducción en soluciones de política pública (como incrementar la presión militar sobre organizaciones codiciosas)—, pero problemática desde el punto de vista del respaldo empírico en las sociedades estudiadas. Es cada vez más claro que los conflictos armados mutan y se transforman, aumentan y disminuyen de intensidad, lo que significa que la codicia es apenas uno entre varios factores que intervienen en las dinámicas de los conflictos.

Aún después de terminar, las consecuencias de los conflictos armados permean las instituciones sociales, políticas y económicas de los países afectados. Por consiguiente, los críticos de la literatura temprana sobre la codicia abogan por superar su reduccionismo, ceguera cultural y marcado ahistoricismo. En línea con Arnson y Zartman (2005) y con Ballentine y Sherman (2003), proponen una mirada más matizada, multicausal a todos los factores (económicos, políticos y culturales) que pueden intervenir en el surgimiento de guerras y en su prolongación y transformación. Recuerdan, por ejemplo, que el saqueo como herramienta de guerra ha sido documentado por los menos desde el Medioevo, y que la crueldad en la obtención de los recursos no es una marca de nuestro tiempo (Berdal 2005). En breve, todas las guerras parecen tener elementos de codicia y agravio.

Comparativamente hablando, el mundo es hoy un lugar más pacífico de lo que era hace varios siglos (Pinker 2011; Hewitt, Wilkenfeld y Gurr 2012). Sin embargo, los conflictos armados y las guerras que persisten o surgen siguen planteando dilemas a los estudiosos y a quienes, por medio de la formulación de políticas públicas, buscan terminarlos y dilucidar sus consecuencias en el devenir de las sociedades (Ross 2013). Así, tras dos décadas de producción académica, existe consenso en cuanto a que las rebeliones de todo tipo requieren ser viables financiera y militarmente para su supervivencia (Collier, Hoeffler y Rohner 2009). No obstante hay válidas y hondas críticas a los análisis unidimensionales de las causas de las rebeliones, y un llamado a estudiar a profundidad las diversas conexiones e implicaciones de esta relación. El campo para la investigación se ha ampliado notablemente. La siguiente sección esboza la agenda pendiente.

La agenda pendiente

La variación subnacional

En primer lugar, los estudios sobre la economía política de los conflictos armados han tendido a enfatizar el nivel nacional de los países en guerra. Pero, como ha empezado a documentar una creciente literatura (Hilgers y Macdonald 2017; Justino, Brück y Verwimp 2013; Rettberg 2010b, 2012; Ross 2015; Snyder 2001), a nivel subnacional se presentan fenómenos que la agregación de la información a nivel nacional oculta o distorsiona. En regiones específicas es común encontrar historias, intereses, prácticas y actores particulares que permiten una comprensión más afinada y compleja de las realidades y las historias del enfrentamiento a nivel nacional. De ahí que el nivel nacional pueda considerarse más como una convención geográfica que como la única unidad de análisis pertinente (Libman 2010; Leiteritz, Nasi y Rettberg 2009; Rettberg, Leiteritz y Nasi 2011). Por tanto, las variaciones subnacionales en los países en guerra, en cuanto a la intensidad y las formas de violencia y también en cuanto a los recursos vinculados a la misma, constituyen un campo fértil para la exploración académica y la formulación de políticas públicas.

La resiliencia (o contraejemplos)

En segundo lugar, al privilegiar la relación entre recursos particulares y el fenómeno del conflicto, la literatura no ha problematizado suficientemente la existencia de recursos que no terminan incitando o prolongando los conflictos. Pareciera que el vínculo entre recursos y guerra no es automático ni necesario ni tampoco irreversible, y conviene preguntarse más en detalle por los factores de protección y resiliencia que impiden o atenúan dicho nexo.

La relación entre varios recursos, el conflicto y la criminalidad

Tercero, la búsqueda de relaciones generalizables unidireccionales entre recursos y guerras, primordialmente por razones metodológicas, ha impedido un estudio adecuado de las relaciones simultáneas entre varios recursos, por un lado, y el conflicto y la criminalidad, por el otro. Así, el contexto más amplio en el que actores armados y criminales buscan estructuras de oportunidad y responden a incentivos generados no solo por un recurso sino por varios al tiempo no ha sido considerado en la literatura como mecanismo para atenuar, acentuar o modificar las dinámicas de guerra. En la práctica, pareciera que las organizaciones armadas y criminales desarrollan lo que podríamos llamar portafolios de recursos (Rettberg y Ortiz-Riomalo 2016), en los cuales los recursos disponibles son integrados de forma intercambiable a las dinámicas de guerra, dependiendo de factores como la estructura de precios y la intensidad de la coerción estatal.

La inercia institucional como factor de prevención o de propulsión

Cuarto, un tema poco explorado en las discusiones sobre las instituciones extractivas y sus vínculos con las guerras se refiere a la inercia institucional y los procesos de aprendizaje entre actores e instituciones, lo que incide en los vínculos entre recursos y conflicto. Como ocurre con cualquier institución, el *path-dependence* (North 1990; Mahoney 2000; Pierson 2000), o la forma en la que una elección determina y limita decisiones futuras (en contraste con la idea de que los individuos enfrentan siempre un repertorio completo de opciones), aplica también a los vínculos entre recursos y guerras. En la medida en que los actores y organizaciones actúan en contextos marcados por incentivos institucionales, adaptan sus estrategias a dichos contextos y, con ello, prefieren ciertos rumbos de acción sobre otros. Esto opera tanto a favor como en contra de las inercias de la guerra, pues la "dependencia del sendero inicial" (*path-dependence*) institucional puede obrar como factor de protección o de propulsión.

Diferentes conflictos y formas de criminalidad frente a un mismo recurso

Por último, la literatura ha prestado poca atención a la manera en la que los recursos se relacionan con las transformaciones de las formas de criminalidad. En efecto, una buena parte del reciente interés en temas de criminalidad y seguridad urbanas en el posconflicto (Moser y McIlwaine 2001; Muggah 2009; Kunkeler y Peters 2011; Yassin 2008) puede atribuirse a los hallazgos de acuerdo

con los cuales, cuando terminan las guerras (Paris 2004), la continua circulación de armas en combinación con la experticia criminal acumulada y la continua operación de mercados ilícitos producen nuevas formas de violencia y criminalidad. En parte, esto explica la dificultad de que países inmersos en guerras logren reducir sosteniblemente sus índices de violencia y reincidan en nuevos ciclos de violencia (Rettberg 2012).

Relacionado con esto, repentinas alzas de precio sin acompañamiento institucional pueden generar impactos en la producción de algunos recursos, promoviendo, por ejemplo, un aumento de la informalidad en la explotación. Esta con frecuencia atrae actores ilegales, que aprovechan los vacíos regulatorios o la indefensión de los productores para imponer licencias a la operación y gravámenes a la producción. Esta relación entre el comportamiento de los mercados, la informalidad y sus nexos con la actividad criminal, es decir, la transformación de los nexos entre recursos, conflicto armado y criminalidad a través del tiempo, no ha sido analizada por la literatura.

Estas pistas serán analizadas en el transcurso de las investigaciones que son la base de este libro. Además, forman parte del marco analítico presentado adelante. La siguiente sección completa esta revisión con una mirada a la producción académica sobre Colombia.

La relación entre recursos legales, ilegales y el conflicto armado en Colombia

Primero, un breve retrato

El colombiano ha sido el conflicto armado interno activo más longevo del hemisferio occidental. En 1964 se fundaron los principales grupos insurgentes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Centro Nacional de Memoria Histórica 2013; Corporación Observatorio para la Paz 2001; Ferro y Uribe 2002; Medina 1996; R. Ortiz 2005; Pécaut 2008; Pizarro 1991 y 1996). A estos grupos se sumaron con los años otras organizaciones criminales y paraestatales (Duncan 2006; Gutiérrez y Barón 2006; Rangel 2005; Reyes 1991; Romero 2003). Ambos son responsables de la pérdida de miles de vidas y del grave impacto que el conflicto armado ha tenido en el desempeño de la economía (Valencia 2006; Echeverry, Salazar y Navas 2001; Álvarez y Rettberg 2008; Santamaría, Rojas y Hernández 2013) y las instituciones colombianas (Bouvier 2009, Restrepo *et al.* 2004, Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, García Villegas y Revelo 2011; Garay Salamanca 2008; Nasi 2007; Orjuela 2000; Pizarro Leongómez 2004).

En contraste con las guerras civiles centroamericanas, el conflicto colombiano sobrevivió a la caída del Muro de Berlín en 1991 y a la concomitante pérdida de apoyo financiero e ideológico para las guerrillas por parte de la Unión Soviética, y al Estado por parte de los Estados Unidos, lo que en otros países llevó al cese súbito de las hostilidades. En segundo lugar, si bien el conflicto colombiano no fue de naturaleza secesionista (ni ha involucrado demandas de autonomía de localidades) sí ha mostrado particularidades regionales en cuanto a su intensidad y la composición de los protagonistas en contienda (Oquist 1978). En tercer lugar, más temprano que en muchos otros conflictos, los diferentes actores armados ilegales desarrollaron una relación de dependencia económica respecto a la producción y tráfico de drogas ilícitas y de otros recursos, lo que les permitió mantener una mayor independencia frente a potencias extranjeras. Gracias a esto lograron engrosar sus filas reclutando combatientes en el campo colombiano (muchos de ellos menores de edad) y desarrollaron una importante capacidad ofensiva.

Finalmente, en su larga trayectoria, el conflicto armado colombiano sufrió varias transformaciones. En primer lugar, a las organizaciones originales se sumaron otras que, con el tiempo, se reintegraron a la legalidad. Algunas lo hicieron tras múltiples negociaciones de paz y bajo el amparo de nuevas reglas de juego. Por ejemplo, el M-19, surgido en los setenta tras un presunto fraude electoral, y el Movimiento Quintín Lame, que enarboló la causa de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, se desmovilizaron en el contexto de una nueva Constitución, promulgada en 1991 (Villarraga 2010). Los grupos paramilitares, surgidos desde los años ochenta primero como respuesta de terratenientes y narcotraficantes ante los hostigamientos de las guerrillas, pero que luego se independizaron para convertirse en ejércitos contrainsurgentes con una agenda territorial y expansionista propia en mayor o menor coordinación con diferentes entidades estatales y con sus fundadores, se desmovilizaron en el contexto de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), proceso que fue facilitado y monitoreado por la representación de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) en Colombia (Restrepo y Bagley 2011).

Además, el Estado colombiano ha desempeñado roles diferentes frente al conflicto, oscilando entre la indiferencia y la incapacidad, la apropiación de una lectura estructural de las causas objetivas de la violencia y la criminalización de la actividad armada. En los últimos veinte años ha experimentado las oscilaciones más severas de cara al conflicto armado. Tras varios reveses militares importantes en el campo y la ciudad, durante la administración Pastrana (1998-2002), pasó a la defensiva y a la promoción de negociaciones de paz. Cuando estas fracasaron optó por una estrategia ofensiva que incluyó el fortalecimiento militar, lo que posibilitó propinar duras derrotas a las organizaciones armadas ilegales, como la caída de varios de los principales cabecillas de las FARC, así

como un significativo aumento en las deserciones individuales (según la Agencia Colombiana para la Reintegración, entre el 2003 y el 2013, 23.917 personas se desmovilizaron individualmente; ACR 2014).

El gráfico 1 ilustra, además, el comportamiento de tres variables fundamentales de la violencia colombiana: los homicidios, el desplazamiento forzado y el secuestro. Como se puede apreciar, el año 2002 marca un quiebre importante en la tendencia de estas variables. En cuanto a los homicidios, Colombia descendió de 80 por 100.000 habitantes en 1991 a 32 por 100.000 habitantes en el 2012. Todo esto, que le ha valido al país el ingreso al grupo de economías medianas más promisorias para la inversión (*Financial Times* 2013; Banco Mundial 2013, 26), puede atribuirse en gran parte al activo rol desempeñado por el Estado colombiano. Notablemente, el fortalecimiento estatal, que empezó enfatizando la dimensión militar, se ha visto reflejado también en campos como la cobertura en educación y en salud (Barrera, Maldonado y Rodríguez 2012; Bernal y Gutiérrez 2012).

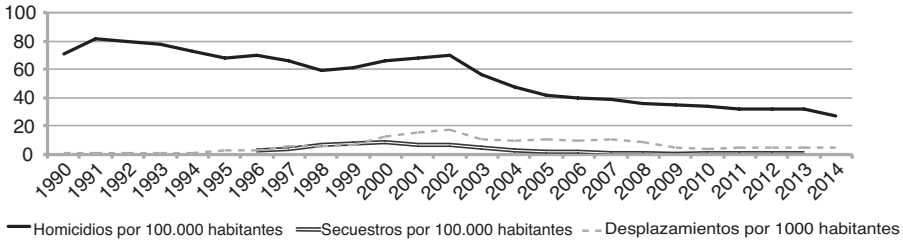


Gráfico 1. Tasas anuales de homicidio, desplazamiento forzado y secuestro en Colombia, 1990-2014

Fuente: Elaborado por los autores con base en los datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2014, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 2016 y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2014b.

En tercer lugar y de la mano de los dos fenómenos anteriores, Colombia ha sido por décadas escenario de diferentes formas de delincuencia común y criminalidad que han contribuido a la violencia que ha marcado al país. Según Villa *et al.* (2013), en el período de 1988 al 2008, el 12 % de los homicidios, en promedio, son atribuibles al conflicto armado, mientras que los restantes se han producido en las calles y veredas del país, e incluyen desde riñas de borrachos hasta accidentes automovilísticos. Los vasos comunicantes entre la actividad armada vinculada a agendas políticas y aquella violencia desprovista de propósitos políticos han variado en intensidad, pero han sido un fenómeno transversal. Esto se refleja, por ejemplo, en un boyante mercado lícito e ilícito de armas (según el Ministerio de Defensa, uno de cada trescientos colombianos posee un arma de fuego, véase *El Tiempo* 2014) en el que han intervenido actores armados y

criminales de diferente naturaleza, quienes han establecido alianzas en torno a la obtención y distribución de armamento. Se refleja también en el fenómeno de la criminalidad urbana que, igual que el conflicto armado, se nutre de juventud desocupada y que se vincula a mercados ilícitos.

Finalmente, las porosas fronteras entre criminalidad y actividad armada, que muestran las tensiones entre la coexistencia y la colaboración, se refleja también en el surgimiento de las así llamadas bandas criminales (bacrim) o grupos armados organizados (gao), que operan en 149 municipios de 22 departamentos de Colombia, equivalente al 13 % de los municipios del país (Indepaz 2016). Herederas de estructuras paramilitares, las bacrim han copado varios de los mercados ilícitos que operan en las regiones colombianas tras la desarticulación del paramilitarismo, que se presentó en las negociaciones en Santa Fe de Ralito (Córdoba), en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). En sus filas conviven nuevos, antiguos y reconvertidos combatientes, pues han absorbido desertores y desmovilizados reincidentes de todos los grupos y orientaciones ideológicas, así como reclutado nuevos miembros, aprovechando de forma pragmática la experticia criminal adquirida en el marco del conflicto. La línea divisoria entre organizaciones armadas y meramente criminales es real, pero es porosa, y advierte la posibilidad de continuas transformaciones en el rumbo y la forma que podrán adoptar la criminalidad y la violencia colombianas, aun en ausencia de las organizaciones armadas ilegales actualmente activas.

La economía política del conflicto armado colombiano

El conflicto armado colombiano ha alimentado una rica literatura académica (Blair 2012; Rettberg 2010). Décadas de violencia política y social han puesto a Colombia en un lugar privilegiado para estudiar el fenómeno del conflicto armado, la inseguridad y la criminalidad. En especial, los estudios sobre "la Violencia", como se conoce al período de 1948 a 1953, durante el cual Colombia se vio sumida en un profundo enfrentamiento partidista (Guzmán, Fals Borda y Umaña 1962), activó una importante producción científica. Solo entre 1990 y el 2007 se publicaron más de 700 artículos y libros sobre la violencia en Colombia (Peñaranda 2007). Obras emblemáticas de esta producción incluyen a Sánchez (1985) y Sánchez y Peñaranda (2007), según el cual el conflicto armado no puede entenderse como coyuntura política sino como "elemento estructural de la evolución política y social del país"; a Pécaut (1987), quien retrata la paradójica convivencia del orden y la violencia en la historia nacional; y a la Comisión de Estudios sobre la Violencia (Sánchez *et al.* 1987), que analiza la relación entre el conflicto armado y las deficiencias del régimen democrático colombiano.

Reflejando lo que otros autores habían postulado ya respecto al período de "la Violencia" —a saber, que esta tuvo manifestaciones regionalmente distintas, sumiendo a unas regiones en la cuasianarquía y dejando intactas a otras—[3], González, Bolívar y Vásquez (2003) encontraron que también el conflicto armado presenta variaciones asociadas a factores macro (o nacionales), meso (o regionales) y micro (municipales y veredales). La presencia diferenciada de las instituciones del Estado a lo largo del territorio lleva a estos autores a concluir que un aspecto fundamental del caso colombiano es la existencia de manifestaciones regionalmente específicas del conflicto armado. Con esto, los autores corroboran trabajos previos realizados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de acuerdo con los cuales también en el aspecto del enfrentamiento armado Colombia es un país de regiones (Zambrano 1998). Más recientemente, el trabajo del Grupo de Memoria Histórica se sumó a este diagnóstico planteando en sus diferentes informes la existencia de distintos "órdenes" regionales, o conjuntos de reglas sociales, económicas y políticas (Centro Nacional de Memoria Histórica 2013)[4]. También el Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (Odecofi) ha adelantado un trabajo importante sobre la configuración social del territorio, las iniciativas de desarrollo, paz y civilidad y la relación entre poder, ciudadanía y civilidad en varias regiones colombianas (García y Aramburo 2011; González 2008, 2014; González *et al.* 2012, 2014; Vásquez, Vargas y Restrepo 2011). En general, para quienes han adoptado una mirada desde las regiones, queda claro que la intensidad del conflicto, las estrategias de los actores armados y la forma y el alcance de los procesos de victimización presentan una gran variación regional y temporal.

Conflicto armado y narcotráfico

Por lo menos desde los años ochenta se ha estudiado y denunciado el papel de las drogas ilícitas —el cultivo y el tráfico de base de coca y de amapola, ambos insumos para drogas como la cocaína y la heroína— en la economía política del conflicto armado colombiano. Existe un consenso generalizado de que, a todo lo largo y ancho de la cadena de producción —desde el cultivo de hoja de coca y el cobro de gravámenes a los campesinos cocaleros, hasta la distribución de la

3 Véanse, por ejemplo, Roldán (2003) sobre Antioquia; C. M. Ortiz (1985) sobre el Quindío; Uribe (1990), Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña (1962) y Henderson (1985) sobre el Tolima; y González Arias (2005) sobre el Huila.

4 Véanse también los distintos informes individuales del Centro Nacional de Memoria Histórica en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co.

cocaína en los mercados ilícitos internacionales—, actores ilegales han participado en el negocio de las drogas ilícitas. Por consiguiente, al estudio de los efectos distorsivos del narcotráfico en la economía nacional (Caballero y Junguito 1978; Thoumi 1995, 1993; Urrutia 1990; Steiner y Corchuelo 2000; Reina 1996; Sarmiento 1990), en la cultura y la sociedad (Camacho Guizado 1992, 1989; Rincón 2009; Fernández Andrade 2002; Mejía Quintana 2010a, 2010b), en la política (Rangel 2005; Orjuela 1990; Thoumi 1999; Sánchez García 2011; Camacho 2011; Melo 1998) y en la criminalidad (Guzmán 1999; Rubio 1999; Sánchez y Núñez 2001) se ha sumado un número importante de estudios sobre la relación entre narcotráfico y conflicto armado (Angrist y Kugler 2008; Bagley 2001; Camacho 2006; Echandía 2001; Holmes, Gutiérrez de Piñeres y Curtin 2006; IEPRI 2006; López 2008; Mejía y Gaviria 2011; Mejía y Restrepo 2013; Pardo 2000; Rangel 2005; Sánchez y Díaz 2004; Sánchez 2007). En la literatura persisten discusiones en torno a la profundidad de la dependencia de los actores armados ilegales del narcotráfico y de cómo este ha moldeado las agendas políticas de los movimientos. Pero pocos disputarían hoy que los cultivos ilícitos y el narcotráfico han sido un poderoso combustible del conflicto armado y de la criminalidad en Colombia (Arias *et al.* 2014; IEPRI 2006). Mejía y Rico (2010), por ejemplo, calculan que para el 2008 las rentas que recibían los grupos armados ilegales del narcotráfico se acercaban al 2,5 % del PIB colombiano.

Como resultado, conceptos centrales de la relación entre drogas y guerra en Colombia, la literatura académica de la economía política de los conflictos armados —como saqueabilidad y codicia—, así como la búsqueda de vínculos entre recursos y guerra, se han constituido en referentes importantes en el estudio del conflicto colombiano (Gutiérrez 2004 y 2008; Nasi y Rettberg 2006, IEPRI 2006). Al mismo tiempo, el énfasis en la importancia del narcotráfico —un solo recurso— en la financiación de los actores armados ha obrado en perjuicio de la generación de conocimiento acerca de otros mercados ilícitos y su relación con el conflicto colombiano.

Aunque la literatura académica y el debate público siguen dominados por el énfasis en el narcotráfico como fuente principal de financiación para los actores armados, una naciente síntesis entre el enfoque regional del conflicto armado colombiano y la mirada a la relación entre recursos y guerra ha subrayado la importancia de desnarcotizar la agenda de investigación sobre el conflicto armado colombiano y propiciar nuevas aproximaciones a su estudio. Así, Massé y Camargo (2012) analizan la relación entre actores armados y sector extractivo, Rettberg, Leiteritz y Nasi (2011) brindan una visión panorámica de la relación entre recursos y guerra en diferentes regiones, Dube y Vargas (2013) analizan la relación entre los choques de precios y la violencia en las regiones cafeteras y petroleras, Idrobo, Mejía y Tribín (2014) identifican el impacto de la minería ilegal de oro en el conflicto, y Rettberg (2010, 2012) y Giraldo y Muñoz (2012)

analizan las dinámicas del conflicto en la zona cafetera y la relación entre oro, madera y criminalidad en Antioquia, respectivamente. En su conjunto, estos trabajos corroboran el postulado de Klare (2002, 215), según el cual, en la geografía contemporánea de las guerras, la concentración de los recursos más que los límites políticos son los rasgos decisorios.

En este libro no pretendemos disputar el rol sustancial que el narcotráfico ha jugado en la continuación y transformación del conflicto armado colombiano. Sin embargo, conscientemente optamos por enfocarnos en los recursos legales que dominan determinadas economías regionales, construyendo sobre la naciente corriente de economía política regional. Así, buscamos hacer hincapié en que la consideración de los recursos ilegales por sí sola arroja un cuadro incompleto de las complejas dinámicas de la economía política criminal desarrollada al amparo del conflicto armado y que han desarrollado capacidades autónomas que pueden comprometer la estabilidad de una transición definitiva hacia el posconflicto.

Los casos estudiados en este libro

En la selección de los casos estudiados en este libro seguimos las indicaciones de la literatura, buscando recursos del sector extractivo (carbón, esmeraldas, ferroníquel, oro y petróleo), como también del sector agrícola (banano, café y flores). Tuvimos en cuenta la posibilidad de incluir tanto a los grandes contribuyentes a los ingresos nacionales, como el petróleo y el carbón, así como recursos que juegan un papel importante en los ingresos de sus respectivas regiones, como las esmeraldas. La mayoría de los recursos estudiados están firmemente vinculados al sector externo (con el carbón y el petróleo dominando las exportaciones nacionales), lo que nos permite rastrear el impacto del comportamiento de los mercados internacionales en las dinámicas locales. Los gráficos 2, 3 y 4 y la tabla 1 presentan información comparativa acerca de la contribución de los recursos al PIB colombiano y a las exportaciones, para así ilustrar las diferencias entre ellos en términos de su peso en la economía nacional (información pormenorizada sobre cada recurso se encontrará en los capítulos respectivos). Algunos recursos, como el oro, el carbón y el petróleo, dependen crucialmente de la inversión extranjera, así como de la experticia y la tecnología externa. Otros, como el banano, el café, las esmeraldas y las flores siguen mayoritariamente bajo control de propietarios nacionales. En su conjunto, los casos estudiados ofrecen una amplitud sin precedentes en variedad y detalle, estructurada en torno a la misma aproximación analítica.

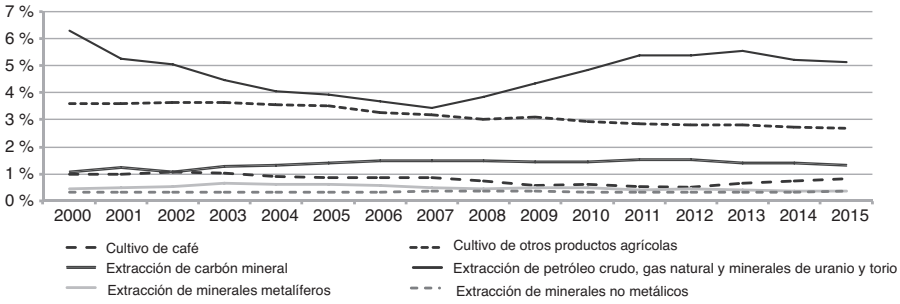


Gráfico 2. Participación en PIB colombiano de diferentes ramas de actividad económica (porcentaje), 2000-2015

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos del Banco de la República 2016b.

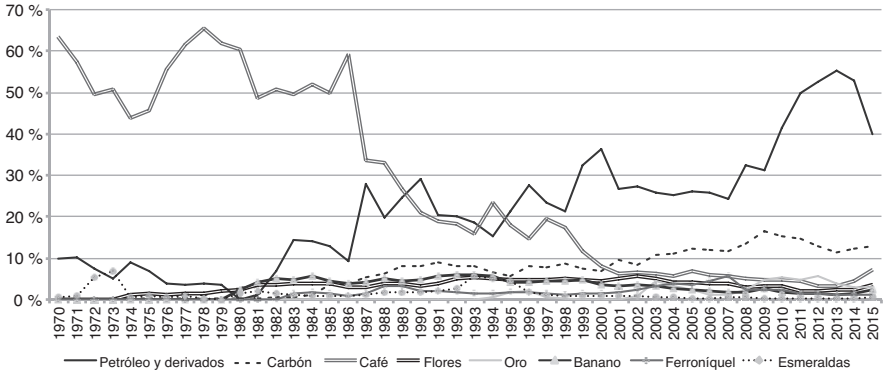


Gráfico 3. Recursos selectos como porcentaje de exportaciones colombianas totales, 1970-2015

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos del Banco de la República 2016a.

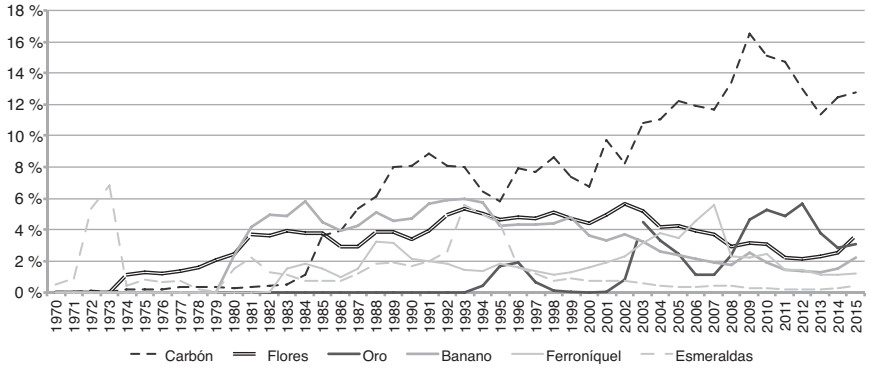


Gráfico 4. Recursos selectos como porcentaje de exportaciones colombianas totales, 1970-2015 (sin café ni petróleo)

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos del Banco de la República 2016a.